

## **Declaración de la CES sobre el brote de COVID-19 y la estrategia de recuperación 9 de junio de 2020**

---

La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias han puesto en peligro el proyecto europeo y la democracia. El confinamiento y las medidas adoptadas por los gobiernos europeos para hacer frente a la emergencia han generado terribles consecuencias en términos de recesión económica, desempleo masivo, obstáculos a la libertad de movimiento, deterioro de las condiciones y derechos laborales, aumento de la desigualdad y de la exclusión social.

Para la CES, la salud de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras, así como la protección de los empleos y los derechos han sido la prioridad cuando las instituciones adoptaron medidas de confinamiento. En el momento en que estas medidas se relajan para lograr un retorno gradual a la actividad económica, la salud y la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras deben estar plenamente protegidas.

Los efectos de la crisis financiera en los sistemas de salud y en los servicios públicos han sido devastadores, lo que demuestra que los recortes y las privatizaciones han sido la receta equivocada para el bienestar de las personas y la seguridad de nuestras sociedades. Las políticas de austeridad, el enfoque neoliberal de las políticas fiscales, la competencia y el comercio, dieron lugar a una disminución drástica de las inversiones públicas y privadas y a que muchos Estados miembros no fueran capaces de prestar servicios sanitarios adecuados a su población y protección a los trabajadores de los sectores de atención sanitaria y el cuidado de personas.

La reacción al brote en cuanto a la coordinación de los Estados miembros y las iniciativas de la Unión Europea ha llegado muy tarde. Las medidas de emergencia tomadas para apoyar a los trabajadores, a los sistemas de salud y a las empresas afectadas por la crisis aún muestran serias deficiencias: muchos trabajadores y empresas aún no se han beneficiado de esas medidas, que a menudo son poco adecuadas, y en muchos casos los recursos asignados no se han concretado en una ayuda real. Esto debe ser corregido cuanto antes.

Además, algunos gobiernos utilizaron el brote como excusa para atacar el estado de derecho y los derechos humanos, laborales y sindicales, en particular la negociación colectiva. Esta situación, junto con la creciente emergencia económica y social, está aumentando la desesperación y la ira de la gente, oportunidad que está siendo aprovechada por las fuerzas populistas y antieuropeas de extrema derecha para recuperar espacio político.

El retorno a la normalidad no es aceptable si esto significa seguir como hasta ahora. Es necesaria una respuesta europea contundente para prevenir y contener la recesión económica, el desempleo y la pobreza y para reconstruir el proyecto europeo y la democracia. La UE se encuentra en una encrucijada: o bien realiza un cambio de rumbo significativo y se compromete con sus principios fundacionales, o se enfrentará a una crisis política sin precedentes.

La CES viene instando a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que inicien de inmediato una estrategia de recuperación clara, ambiciosa y coordinada. Abogamos por una recuperación basada en un modelo económico más sostenible, inclusivo y justo y en una economía social de mercado, donde se respete el medio ambiente, se ponga la innovación digital al servicio de las personas, se proteja la economía europea, se desencadene un estímulo fiscal masivo para la inversión y la creación de empleo de calidad, se garantice una distribución justa entre los beneficios y los salarios, se proteja a los trabajadores y los derechos sociales, se restablezcan y refuercen los servicios públicos -en particular la atención sanitaria y la educación y la formación- y se asegure la protección social universal.

El plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea, que retomó y amplió la propuesta presentada por Francia y Alemania e incluye muchas reivindicaciones impulsadas por la CES, es un paso importante en la dirección correcta.

La CES aboga por que se ponga a disposición de los Estados miembros una financiación masiva destinada a la inversión, y por que el dinero se recaude a través de instrumentos de deuda común garantizados por la Comisión Europea mediante el aumento de los recursos propios de la UE, evitando así la creación de una deuda adicional insostenible en los países de la UE.

La estrategia de recuperación debe reparar los daños de la crisis y construir un nuevo modelo económico y social basado en la solidaridad, la convergencia y la cohesión económica y social, rompiendo finalmente con las políticas de austeridad. La suspensión del Pacto de Estabilidad ha permitido adoptar las medidas de emergencia necesarias, pero sólo una revisión radical de la gobernanza económica y social de la UE y del proceso del Semestre puede garantizar una recuperación justa.

La inversión para salir de la recesión debe contribuir a los compromisos de la UE en materia de acción climática y de lucha contra el desempleo, en particular para los jóvenes, y éstas deben ser las condiciones generales de toda la financiación. Los servicios públicos, la atención sanitaria, la educación y formación, los sistemas de protección social y las infraestructuras sociales tienen que recibir un fuerte apoyo.

Es fundamental aumentar los recursos propios de la Unión Europea, sobre la base del régimen de Comercio de Derechos de Emisión, un mecanismo de ajuste fronterizo de las emisiones de carbono, y la imposición de gravámenes sobre las operaciones de grandes empresas, incluidos un nuevo impuesto digital y un impuesto sobre los plásticos no reciclados. Hay que poner fin a la competencia fiscal desleal mediante una base y un tipo mínimo del impuesto de sociedades de la Unión Europea, así como reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión, la elusión y el fraude fiscales.

La CES espera que la estrategia de recuperación se centre en una transición justa a todos los niveles, en reforzar las industrias y los sectores económicos de la UE, en apoyar a las trabajadoras y trabajadores afectados por procesos de insolvencia y reestructuración, en rediseñar las cadenas de suministro europeas para hacerlas más sostenibles, en redefinir nuestras normas de competencia y en hacer que nuestra política comercial sea más justa e inclusiva, en particular mediante disposiciones laborales vinculantes y aplicables en los acuerdos comerciales.

La UE no debe dar dinero a las empresas sin ejercer un control sobre su comportamiento. La financiación del plan de recuperación debe estar condicionada a la creación de puestos de trabajo decentes, al cumplimiento del pago de impuestos y a la consecución de los objetivos climáticos acordados mediante una transición justa. Es importante que cualquier empresa que se niegue a negociar con los sindicatos no reciba subvenciones, fondos u otros contratos públicos.

La CES siempre ha exigido que el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales sea una de las condiciones de la financiación de la recuperación, al tiempo que subraya la necesidad de que los derechos laborales, sindicales y sociales, el diálogo social y la democracia económica y laboral, el Pilar Europeo de los Derechos Sociales y la Agenda 2030 de la ONU, sean la base de toda la financiación concedida.

También es muy importante que la Comisión Europea confirme todas las iniciativas que impulsen una recuperación justa y socialmente sostenible, al tiempo que da mayor relieve a su política de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, y refuerza sus compromisos para un Plan de Acción Europeo para la Democracia y el relanzamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

En las extraordinarias circunstancias actuales, la solidaridad es más necesaria que nunca. Sin una estrategia ambiciosa, compartida por todos los Estados Miembros e impulsada por la Unión Europea con un espíritu comunitario, Europa se ve abocada al fracaso.

Por ello, la CES hace un llamamiento a todos los gobiernos para que asuman su responsabilidad, superen sus divisiones y se comprometan a aprobar y aplicar con urgencia la estrategia de recuperación, que sin ser suficiente, es necesaria con urgencia. Los trabajadores y los ciudadanos europeos necesitan ayuda y no pueden esperar más.

La CES, junto con sus organizaciones afiliadas, está dispuesta a contribuir a los planes nacionales y sectoriales para que la estrategia de recuperación sea plenamente operativa. Pedimos por ello un diálogo social efectivo y la plena participación de los sindicatos y los interlocutores sociales al más alto nivel con las instituciones de la UE y con los gobiernos de los Estados miembros.

El futuro de la democracia, la economía y la cohesión social europeas está en juego. El movimiento sindical en Europa siempre ha defendido el fortalecimiento del proyecto europeo promoviendo una Unión Europea que proteja a sus ciudadanos y trabajadores. La Confederación Europea de Sindicatos, que representa a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los países, está unida en la reivindicación de una Europa más justa caracterizada por la solidaridad, los derechos y la justicia social y ambiental.